



JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

Medellín, cinco (05) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	05001 40 03 013 2021 00066 00
Procedimiento:	Acción de tutela
Accionante:	Rosa Irene Varelas Ríos
Accionado:	Municipio de Medellín-Secretaría de Movilidad
Tema:	Debido proceso
Sentencia:	General Nro. 031 Especial 031
Decisión:	Niega por improcedente dada la existencia de otros medios de defensa judicial.

Procede a resolver la acción de tutela del trámite de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Expresa la accionante que al consultar el registro SIMIT se enteró que existían a su nombre los comparendos N° 05001000000025845302, 05001000000025845301, 05001000000025820560, 05001000000025811938, 05001000000025798981, 05001000000025798980, 05001000000024186722, 05001000000024186721, 05001000000023980500, 05001000000023940246, 05001000000023970446, 05001000000023950313, 05001000000023926730, 05001000000023923871, 05001000000023862944, 05001000000023862943, 05001000000022142059, 05001000000022142062, 05001000000021850282, 05001000000021850283, 05001000000021826236, 05001000000021826237, 05001000000019744467, 05001000000019740511, 05001000000019744468, 05001000000019886804, 05001000000019886803, 05001000000019653448, 05001000000019653447,

05001000000019634072, 05001000000019634073,
05001000000019589242, 05001000000019589241,
05001000000017657797, 05001000000017657798,
05001000000017315600, 05001000000012108846,
05001000000011034163, 05001000000010976515,
05001000000010906806 y 05001000000010893992, de los cuales nunca recibió notificación alguna. Por este motivo, remitió a la Secretaría de Movilidad de Medellín, derecho de petición solicitando las pruebas que demostraran que fue notificada personalmente e identificada plenamente como infractor.

Adujo que la Secretaría de Movilidad, contestó su solicitud y no logró demostrar que le hayan notificado personalmente ni identificado plenamente como infractor; además, manifiesta que el ente territorial accionado, está vulnerando su derecho fundamental de petición, en tanto no hizo envío de las guías o pruebas de envío de la foto detección, conforme lo solicitó.

Finalmente, solicitó al Juez constitucional que le tutele los derechos fundamentales al debido proceso, inocencia, legalidad y defensa, ordenando a la Secretaría de Movilidad de Medellín, se sirva declarar la nulidad total del proceso contravencional, dejando si efectos las ordenes de comparendo

N° 05001000000025845302, 05001000000025845301,
05001000000025820560, 05001000000025811938,
05001000000025798981, 05001000000025798980,
05001000000024186722, 05001000000024186721,
05001000000023980500, 05001000000023940246,
05001000000023970446, 05001000000023950313,
05001000000023926730, 05001000000023923871,
05001000000023862944, 05001000000023862943,
05001000000022142059, 05001000000022142062,
05001000000021850282, 05001000000021850283,
05001000000021826236, 05001000000021826237,
05001000000019744467, 05001000000019740511,
05001000000019744468, 05001000000019886804,
05001000000019886803, 05001000000019653448,

05001000000019653447, 05001000000019634072,
05001000000019634073, 05001000000019589242,
05001000000019589241, 05001000000017657797,
05001000000017657798, 05001000000017315600,
05001000000012108846, 05001000000011034163,
05001000000010976515, 05001000000010906806 y
05001000000010893992 y las resoluciones sancionatorias derivadas de la
mismas, y proceda a notificarle debidamente, enviándole la orden de
comparendo a la última dirección registrada en el RUNT, para poder ejercer
su derecho a la defensa..

1.2. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 26 de enero de 2021, ordenando requerir a la autoridad reclamada, para que se pronunciara respecto de lo alegado por la parte demandante. Se ordenó oficiar al RUNT para que suministrara las direcciones de la accionante.

1.3. La **Secretaría de Movilidad de Medellín**, a través de Francisco Javier Arango Vásquez, Inspector de Policía Urbano de Primera Categoría, adscrito a la Secretaría de Movilidad de Medellín, dio respuesta dentro del término otorgado por el Despacho, indicando que referente al derecho de petición incoado por la accionante, se le dio respuesta mediante el radicado de salida 202030426024, la cual conoce la actora, puesto que la adjuntó al escrito de tutela. Que en lo que respecta a los comparendos N° D05001000000025845302 del 22 de diciembre 2019, D05001000000025845301 del 22 de diciembre 2019, D05001000000025820560 del 01 de diciembre 2019, D05001000000025811938 del 25 de noviembre 2019, D05001000000025798980 del 11 de noviembre 2019, D05001000000024186722 del 14 de octubre 2019 y D05001000000024186721 del 14 de octubre 2019, se encuentran en estado “EXONERADO”, razón por la cual han sido descargados del sistema de contravenciones y del SIMIT. Adjunta pantallazos en constancia de ello.

Manifiesta que, en cuanto a la solicitud a la declaratoria de inexequibilidad del Parágrafo 1° del Artículo 8° de la Ley 1843 de 2017 que realizó la Corte Constitucional a través de la Sentencia C038 de 2020, es preciso aclararle

a la accionante que la misma recae única y exclusivamente sobre el Parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017; en consecuencia, los demás apartes de dicho cuerpo normativo continúan vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, por lo que se debe entender que los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones, como lo son las fotodetecciones, pueden seguir funcionando siempre y cuando se cumpla con el procedimiento legal ya definido en igual norma. Así mismo, el propio tribunal constitucional se ha pronunciado sobre los efectos que se derivan de sus fallos en una declaratoria de inconstitucionalidad, en Sentencia de Unificación SU 0-37 de 2019, donde manifiesta que: *“La declaratoria de inexequibilidad de una disposición tiene efectos hacia futuro (ex nunc)”* y en Sentencia C-973 de 2004 expresa: *“(…) las sentencias de constitucionalidad producen efectos desde el día siguiente a su adopción (…)”*.

Expone que en cuanto a los fallos de los jueces en sedes de tutela en relación a otros procesos contravencionales que cita el accionante, éstas son decisiones dentro del sistema jurídico colombiano que tienen efectos interpartes y no pueden tenerse como una especie de precedente judicial, cuando las mismas no constituyen una fuente de derecho si no que se trata de una sentencia de interés particular.

Indicó que, se enviaron las ordenes de los comparendos electrónicos a la dirección que reportó la accionante en el RUNT, esto es, *“CASA – MEDELLIN”* y la carrera 77A 49A 11 de Medellín. Aclaró que las órdenes de comparendo fueron notificadas con fuentes de dirección diferente, es decir, los comparendos D05001000000023980500 del 07 de septiembre 2019, D05001000000023940246 del 07 de septiembre de 2019, D05001000000023970446 del 07 de septiembre de 2019, D05001000000023950313 del 17 de agosto de 2019, D05001000000023926730 del 27 de julio de 2019, D05001000000023923871 del 27 de julio de 2019, D05001000000023862944 del 08 de junio de 2019, D05001000000023862943 del 08 de junio de 2019, D05001000000022142059 del 31 de marzo de 2019, D05001000000022142062 del 31 de marzo de 2019,

D05001000000021850282 del 12 de enero de 2019,
D05001000000021850283 del 12 de enero de 2019,
D05001000000021826236 del 25 de diciembre de 2018,
D05001000000021826237 del 25 de diciembre de 2018,
D05001000000019744467 del 19 de agosto de 2018,
D05001000000019740511 del 19 de agosto de 2018,
D05001000000019744468 del 19 de agosto de 2018,
D05001000000019886804 del 04 de agosto de 2018,
D05001000000019886803 del 04 de agosto de 2018,
D05001000000019653448 del 04 de julio de 2018,
D05001000000019653447 del 04 de julio de 2018,
D05001000000019634072 del 19 de junio de 2018,
D05001000000019634073 del 19 de junio de 2018,
D05001000000019589242 del 14 de mayo de 2018,
D05001000000019589241 del 14 de mayo de 2018,
D05001000000017657797 del 04 de marzo de 2018,
D05001000000017657798 del 04 de marzo de 2018,
D05001000000017315600 del 03 de septiembre de 2017, a “CASA –
MEDELLIN” y los comparendos D05001000000012108846 del 06 de febrero
de 2016, D05001000000011034163 del 15 de noviembre de 2015,
D05001000000010976515 del 27 de septiembre de 2015,
D05001000000010906806 del 07 de agosto de 2015 y
D05001000000010893992 del 26 de julio de 2015 a la carrera 77A 49A 11
de Medellín, debido a que a estos últimos se les aplicó la normatividad en
materia de procedimientos contravencionales generados por la comisión de
presuntas infracciones captadas por medios tecnológicos regulada en la Ley
769 del 2002 o Código Nacional de Tránsito, modificado este a su vez por la
Ley 1383 de 2010, que estipula expresamente la obligación de la autoridad
de tránsito de realizar la notificación de la apertura de los procesos
contravencionales al propietario del vehículo implicado, no obstante, no
señala específicamente de donde se deben tomar los datos para llevar a cabo
dicho envío, lo que permitía que la Secretaría acudiera a sus bases de datos
internas, en búsqueda de alguna información que permitiera allegar a los
ciudadanos dicha notificación, y a los primeros, esto es, los ocurridos
después del 14 de julio 2017, se les aplicó la Ley 1843 de 2017, a través de
la cual se reguló la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos

y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones, que en su Artículo 8° señala que *“En el evento en que no sea posible identificar al propietario del vehículo en la última dirección registrada en el RUNT”*, lo que impone a las autoridades de tránsito a hacer la notificación exclusivamente a los datos que los ciudadanos reporten en el Registro Único Nacional de Tránsito.

Pero las empresas de correos Servientrega y/o Domina reportaron la novedad de *“DIR. INCOMPLETA Y NO RESIDE”*, causal de devolución por la que no se puede efectuar la entrega.

Advirtió la accionada que el hecho de no tener el dato de contacto actualizado y completo, tanto en el organismo de tránsito como en el RUNT, conlleva que no se dé la entrega efectiva, lo cual implica que en contra de la peticionaria se debe aplicar el principio legal denominado por la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional como: *“nemo auditur propiam turpitudinem allegans”*, nadie puede alegar a su favor su propia culpa (Tutela 1231 de 2008).

De igual manera, manifestó que en atención al párrafo segundo del artículo 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, se realizaron las publicaciones de citaciones para notificaciones personales, en la cartelera de la Secretaría de Movilidad de Medellín y en la página WEB de la misma y se fijaron de igual manera las notificaciones por aviso. Y que, para los procesos contravencionales nacidos en razón de una infracción de tránsito captada por medios electrónicos, las normas que regulan este tipo de procedimientos permiten de manera específicamente la notificación de los mismos a través de aviso.

Adujo que la Ley 1843 de 2017 señala que la autoridad de tránsito cuenta más que con una autorización, con un mandato legal que exige que para aquellos casos en los que no sea posible la entrega efectiva de la notificación de las ordenes de comparendo a través de correo certificado, realizará el proceso de notificación a través de la publicación por aviso de la orden de comparendo.

Y que, es necesario recordar que los cuestionamientos, inconformidades y controversias en torno al procedimiento de notificación por Aviso, deben ser

debatidos ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, toda vez que dentro del expediente se encuentran las constancias secretariales del trámite de notificación de conformidad con el artículo 68 y 69 de la Ley 1437 del 2011, y dentro del término se expidió resolución sancionatoria la cual se encuentra debidamente ejecutoriada, gozando del principio de presunción de legalidad del Acto; es entonces, como siguiendo el procedimiento, una vez finalizado el trámite de notificación, se convocó a audiencia pública donde el Inspector profirió las Resoluciones correspondientes, por medio de las cuales se sancionó al accionante.

Seguidamente, el ente territorial hizo un recuento normativo sobre la utilización de los medios tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito, el debido proceso administrativo contravencional por evidencias tecnológicas, el procedimiento de notificación en el caso concreto según la ley 1843 de 2017, de los presupuestos procesales de la acción de tutela y de la improcedencia de la mismas frente a los principios de subsidiariedad y residualidad.

Conforme a todo lo anterior, concluyó el accionado que se le ha garantizado el debido proceso administrativo a la afectada, ya que, el trámite se desarrolló dentro de los parámetros establecidos en la Constitución y en la Ley. Además, que se acude a la acción de tutela de manera apresurada e injustificada, pues el mismo tiene las acciones administrativas como la nulidad y restablecimiento del derecho; por tanto, solicitó que se deniegue por improcedente la acción de tutela, toda vez que la Secretaría de Movilidad de Medellín ha cumplido con lo dispuesto dentro de su esfera de competencia para atender la petición de la accionante, y no existe vulneración al debido proceso, pues no ha adelantado por acción u omisión acto alguno vulnerador de los derechos fundamentales constitucionales de la peticionaria.

II. COMPETENCIA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 2591 de 1991, artículo 32, es competente

este Despacho para conocer y decidir respecto de la solicitud de tutela impetrada.

III. PROBLEMA JURÍDICO.

De acuerdo con la situación fáctica puesta de presente en el asunto bajo estudio, se debe determinar si el Municipio de Medellín- Secretaría de Movilidad, le está vulnerando los derechos fundamentales a la accionante.

IV. CONSIDERACIONES.

4.1. DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA (ACTIVA – PASIVA) EN LA ACCIÓN DE TUTELA.

De conformidad con el artículo 86 de la constitución política “Toda Persona” puede recurrir a la acción de tutela “para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, **por sí mismo o por quien actúe a su nombre**, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

Conforme lo anterior, la acción de tutela puede ser ejercida por toda persona que considere que le están vulnerando sus derechos constitucionales fundamentales sea nacional o extranjera, natural o jurídica, ciudadano o no, que se halle en el territorio colombiano o se encuentre por fuera y la autoridad o particular que vulneró los derechos fundamentales se encuentre en Colombia. Así pues, puede ser ejercida directamente o por quien actúe a su nombre, bien sea por medio de (i) un representante legal en el caso de los menores de edad, las personas jurídicas, los incapaces absolutos y los interdictos; (ii) mediante apoderado judicial; y (iii) por agencia oficiosa. En estos tres últimos casos se debe probar la legitimación en la causa por activa.

Como ya se expresó, por mandato constitucional se faculta a todo ciudadano para que en su propio nombre instaure acción de tutela ante una autoridad judicial con el fin de hacer valer sus derechos fundamentales cuando los

considere vulnerados o amenazados; dentro del presente caso, la señora **Rosa Irene Varelas Ríos**, actúa en causa propia, por lo que se encuentra legitimada en la causa por **activa**.

Se tiene además la legitimación en la causa por **pasiva** de la accionada Municipio de Medellín - Secretaría de Movilidad, toda vez que es la entidad a la cual se le endilga la “presunta” vulneración de los derechos fundamentales esgrimidos por la accionante.

4.2. SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

Sabido es que el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagra la tutela para la protección de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos han sido vulnerados o están siendo amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Sin embargo, ésta sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial instituido en el ordenamiento jurídico para la salvaguarda de los intereses en pugna, salvo que se utilice como mecanismo transitorio enderezado a evitar un perjuicio de carácter irremediable. Es lo que se conoce con el nombre de *subsidiariedad* de la acción de tutela y que se erige como un requisito de procedibilidad de la misma.

En términos similares, la Corte Constitucional se ha referido en múltiples ocasiones al concepto de *subsidiariedad*, y como ejemplo de ello, en la sentencia T-063 de 2013 el alto tribunal sostuvo que *“Por su propia naturaleza la acción de tutela tiene un carácter residual o subsidiario, por virtud del cual procede de manera excepcional para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios para asegurar su protección. Así las cosas, este carácter residual obedece a la necesidad de preservar el reparto de competencias atribuido por la Constitución Política a las diferentes autoridades judiciales, lo cual tiene apoyo en los principios constitucionales de independencia y autonomía de la actividad judicial. No obstante, aun existiendo otros mecanismos de defensa judicial, la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que la acción de tutela está llamada a prosperar, cuando se acredita que los mismos no son lo*

suficientemente idóneos para otorgar un amparo integral, o no son lo suficientemente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”¹.

Del mismo modo, la Corte Constitucional, en lo que a la subsidiariedad se refiere, ha expresado que *“(...) las controversias en torno de la legalidad de los actos administrativos deben ser discutidas ante la jurisdicción correspondiente, no siendo viable pretender sustituir ese trámite por este mecanismo especial de amparo de las prerrogativas inherentes a las personas, pues desnaturaliza la acción constitucional consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, pues en modo alguno puede servir de medio para ventilar controversias que no se han puesto previamente en conocimiento de la jurisdicción respectiva, habida cuenta de su carácter subsidiario (...)”²*

Recientemente en sentencia T-028 de 2017, M.P. ALBERTO ROJAS RÍOS precisó:

“La Corte ha señalado que hay ciertos eventos en los que a pesar de existir mecanismos ordinarios de protección, resulta admisible acudir directamente a la acción de tutela con el objeto de obtener la protección pretendida, los cuales han sido sintetizados de la siguiente manera: (i) cuando se acredita que a través de estos es imposible al actor obtener un amparo integral a sus derechos fundamentales, esto es, en los eventos en los que el mecanismo existente carece de la idoneidad y eficacia necesaria para otorgar la protección de él requerida, y, por tanto, resulta indispensable un pronunciamiento por parte del juez constitucional que resuelva en forma definitiva la litis planteada; eventos dentro de los que es necesario entender que se encuentran inmersos los casos en los cuales la persona que solicita el amparo ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional y, por ello, su situación requiere de una especial consideración por parte del juez de tutela; y (ii) cuando se evidencia que la protección a través de los procedimientos ordinarios no resulta lo suficientemente expedita como para impedir la configuración de un perjuicio de carácter irremediable, caso en el cual el juez de la acción de amparo se encuentra compelido a efectuar una

¹ Corte Constitucional Sentencia T-063 de 2013. Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez.

² Corte Constitucional Sentencia T-243 de 2014. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo

orden que permita la protección provisional de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez natural.”

Como puede observarse la acción de tutela es procedente cuando los medios ordinarios de defensa no son expeditos o que éstos no tengan la capacidad de resolver el problema. Por lo que la acción de tutela no es un mecanismo de reemplazo de aquellos que el ordenamiento jurídico ha establecido como adecuados para la solución de los conflictos.

4.3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE DEBE ADELANTARSE ANTE LA COMISIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO CAPTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS.

La Corte Constitucional en la sentencia T 051 de 2016 expuso que *“El procedimiento que debe surtirse ante una infracción de tránsito captada por medios tecnológicos está regulado en la Ley 769 de 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, y por la Ley 1383 de 2010, por la cual se reforma la Ley 769 de 2002-Código Nacional de Tránsito-, y se dictan otras disposiciones. Entiéndase infracción de tránsito la “transgresión o violación de una norma de tránsito”³.*

“En este sentido, es pertinente resaltar que el uso de tecnologías permite a las autoridades de tránsito cumplir su función policiva en el marco de los principios de eficacia y economía, en los términos del Artículo 209 de la Constitución Política y del Artículo 3º, numerales 11 y 12, de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior debido a que se permite acceder a medios probatorios precisos y pertinentes, que logran individualizar el vehículo, el lugar, la hora y el motivo de la infracción, elementos suficientes para iniciar el proceso contravencional. De acuerdo al parágrafo 5 del artículo 8 de la Ley 769 de 2002, la autoridad encargada del Registro Nacional de Conductores está en la obligación de actualizar los datos pertinentes, para el efecto, una de las modalidades empleadas podrá ser la autodeclaración. De acuerdo a la norma, en caso de que el propietario no efectuó la declaración será sancionado con multa de hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

³Artículo 2 de la Ley 769 de 2002

4.4. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO.

Conforme lo ha expuesto en múltiples ocasiones la Corte Constitucional⁴, el procedimiento de cobro coactivo tiene una naturaleza de índole administrativa. Puede ser definido o conceptualizado como *“un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesiten con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales”*⁵.

Por su parte, en sentencia T-447 de 2000, la Corte Constitucional se refirió al procedimiento de cobro coactivo en los siguientes términos: *“Los llamados procesos de jurisdicción coactiva no son de naturaleza jurisdiccional sino administrativos; por tanto, las decisiones que en su trámite adopten las autoridades competentes para adelantarlos están sometidas al control judicial, y les son aplicables las normas generales que regulan la actividad de la Rama Ejecutiva, entre ellas las que consagran el principio de razonabilidad. (Subrayado fuera del texto)”*⁶.

El procedimiento de cobro coactivo al tener, entonces, naturaleza administrativa, los actos que se produzcan en su desarrollo de ninguna manera quedan por fuera del control judicial. Por lo mismo, *“al ser actos administrativos de contenido particular que inciden de manera directa en la creación, modificación o extinción de obligaciones o derechos en cabeza de los administrados, resulta claro que éstos pueden acudir a las vías judiciales instituidas por el ordenamiento jurídico con miras a controvertir su legalidad”*⁷. (resalto fuera de texto).

⁴ Entre otras, confrontar la T-753 de 2012, T-604 de 2005, T-628 de 2008, C-649 de 2002, C-939 de 2003.

⁵ Sentencia T-753 de 2012. Corte Constitucional. Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio.

⁶ Sentencia T-447 de 2000. Corte Constitucional. Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz.

⁷ Así lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C-649 de 2002 a propósito de una demanda de inconstitucionalidad frente al Decreto 0624 de 1989 por medio del cual se expidió el Estatuto Tributario, refiriéndose al procedimiento de cobro coactivo instituido para el cobro de deudas fiscales, sosteniendo que *“la denominada “jurisdicción coactiva”, es decir, la facultad para definir situaciones jurídicas sin necesidad de acudir a la acción judicial (autotutela ejecutiva), se enmarca dentro de la órbita de la función administrativa cuyo objetivo es lograr el cumplimiento de una obligación tributaria en sede administrativa. Empero, ello no significa que ese procedimiento sea ajeno al control judicial, no solo porque el contribuyente puede demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa el acto impositivo de la obligación tributaria, sino, además, porque incluso puede demandar ante esa misma jurisdicción el acto que resuelve sobre las excepciones y ordena continuar con la ejecución (E.T. artículo 835). Vistas así las cosas, la Corte concluye que la*

4.5. CASO CONCRETO.

De acuerdo con la situación fáctica planteada por la actora, el precedente jurisprudencial y el marco legal expuesto, se tiene que para el asunto *sub examine* la tutela deviene, en principio, en improcedente, por contar con otros medios de defensa judicial, en tanto su controversia se centra en la presunta vulneración de derechos por parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín en el proceso contravencional para la imposición de multas de tránsito, proceso que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro que se trata de un trámite de carácter administrativo.

En efecto, con miras a controvertir decisiones de índole administrativa, como

la que hoy se pone en entredicho, el legislador diseñó mecanismos judiciales idóneos que se pueden hacer efectivos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal y como es la revocatoria directa de los actos administrativos. Sobre este último mecanismo, puede resaltarse que desde el artículo 93 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es perfectamente posible que la parte actora efectúe los cuestionamientos que realiza hoy en sede de tutela, máxime cuando alega una vulneración constitucional⁸.

Incluso, en el evento de adelantarse con posterioridad a una sanción un trámite coactivo por la administración, la parte actora contaría con la posibilidad de hacer valer su derecho de defensa en dicho escenario formulando las excepciones que considere, así como de controvertir las decisiones que allí se adopten, las cuales constituyen verdaderos actos administrativos.

De tal forma, resulta claro que el accionante puede acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para efectuar los

jurisdicción contencioso administrativa mantiene el control al ejercicio de la función administrativa, tanto en la etapa de determinación y liquidación del tributo como en la de su recaudo forzoso. (Subrayado fuera del texto).

⁸ Literalmente, la norma señala que “*Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona*”.

cuestionamientos que hoy pretende hacer a través de la acción de tutela, instrumento especialísimo y subsidiario diseñado para la protección efectiva y rápida de los derechos fundamentales.

Téngase presente que la Corte Constitucional, en sentencia **T-051 de 2016**, expuso que ante irregularidades presentadas dentro de un trámite contravencional es viable acudir a los instrumentos judiciales establecidos legalmente. Sobre el particular, señaló la Corte que *“existe otro medio ordinario de defensa judicial idóneo para su protección, consistente en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho”*.

En la misma sentencia, la Corte indicó, ante una tutela incoada por supuestas irregularidades dentro de un trámite contravencional de tránsito, que si bien, en principio, ante una vulneración del debido proceso por parte de la autoridad estatal, *“(...) la tutela es procedente. No obstante, como se analizó, cuando existan otros medios ordinarios de defensa judicial idóneos para la protección de las garantías fundamentales y no se avizore un eventual perjuicio irremediable, se debe acudir a estos de manera preferente”* (Resalto intencional).

No obstante, el carácter subsidiario de la acción de tutela, la misma puede resultar procedente cuando se interpone con miras a evitar un perjuicio irremediable, y en este caso, corresponde al Juez Constitucional analizar los supuestos de hecho planteados por el actor para determinar la viabilidad de la acción, bien directamente o como mecanismo transitorio.

Pese a lo anterior, en el presente caso no se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela, pues si bien la actora manifestó que existía un perjuicio irremediable, la misma no aportó las pruebas de las que se pudiera deducir éste, en tanto la sola imposición de unas multas no constituye en sí misma un perjuicio irremediable⁹; en consecuencia, no puede erigirse como argumento suficiente para no acudir a las herramientas jurídicas pertinentes.

⁹ *“la multa impuesta no puede considerarse en sí misma un perjuicio irremediable, y teniendo en cuenta que al demandarse la nulidad de un acto administrativo se cuenta con la posibilidad de solicitar su suspensión provisional, medida cautelar que hace perder al acto su fuerza ejecutoria mientras se decide de fondo sobre su legalidad”* Corte Constitucional, Sentencia T-115 del 12 de febrero de 2004. MP. Dr. Jaime Córdoba Triviño

Ahora bien, si en gracia de discusión, se entrara a analizar una posible vulneración al debido proceso por la indebida notificación a la accionante y como consecuencia de ello la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa, acorde con las pruebas allegadas por las partes, se observa que, la señora Rosa Irene Varela Ríos, denunciaba como dirección de notificación “CASA”-Medellín, Antioquia, la cual estaba reportada en el RUNT desde el año 2010, misma dirección a la que la Secretaría de Movilidad de Medellín, procedió a enviar la notificación de las ordenes de comparendos electrónicos N°

D05001000000023980500	del	07	de	septiembre	de	2019,
D05001000000023940246	del	07	de	septiembre	de	2019,
D05001000000023970446	del	07	de	septiembre	de	2019,
D05001000000023950313	del	17	de	agosto	de	2019,
D05001000000023926730	del	27	de	julio	de	2019,
D05001000000023923871	del	27	de	julio	de	2019,
D05001000000023862944	del	08	de	junio	de	2019,
D05001000000023862943	del	08	de	junio	de	2019,
D05001000000022142059	del	31	de	marzo	de	2019,
D05001000000022142062	del	31	de	marzo	de	2019,
D05001000000021850282	del	12	de	enero	de	2019,
D05001000000021850283	del	12	de	enero	de	2019,
D05001000000021826236	del	25	de	diciembre	de	2018,
D05001000000021826237	del	25	de	diciembre	de	2018,
D05001000000019744467	del	19	de	agosto	de	2018,
D05001000000019740511	del	19	de	agosto	de	2018,
D05001000000019744468	del	19	de	agosto	de	2018,
D05001000000019886804	del	04	de	agosto	de	2018,
D05001000000019886803	del	04	de	agosto	de	2018,
D05001000000019653448	del	04	de	julio	de	2018,
D05001000000019653447	del	04	de	julio	de	2018,
D05001000000019634072	del	19	de	junio	de	2018,
D05001000000019634073	del	19	de	junio	de	2018,
D05001000000019589242	del	14	de	mayo	de	2018,
D05001000000019589241	del	14	de	mayo	de	2018,
D05001000000017657797	del	04	de	marzo	de	2018,
D05001000000017657798	del	04	de	marzo	de	2018,

D05001000000017315600 del 03 de septiembre de 2017, conforme lo exige el artículo 8 Ley 1843 de 2017 y las ordenes de comparendos electrónicos N°D05001000000012108846 del 06 de febrero de 2016, D05001000000011034163 del 15 de noviembre de 2015, D05001000000010976515 del 27 de septiembre de 2015, D05001000000010906806 del 07 de agosto de 2015 y D05001000000010893992 del 26 de julio de 2015 a la carrera 77A 49A 11 de Medellín, dirección que se encontraba en bases de datos internas de la Secretaría, lo cual era permitido por norma aplicable a dicho procedimiento, esto es, la Ley 769 del 2002 o Código Nacional de Tránsito, modificado este a su vez por la Ley 1383 de 2010, y la empresa de correos hizo la devolución de esa notificación, certificando que no fue posible hacer la entrega y reportó como novedad **“DIR. INCOMPLETA, CERRADO Y NO RESIDE”**, tal y como se observa en las guías de devolución aportadas por la accionada.

Circunstancia que impidió que la tutelada pusiera en conocimiento de la actora -por medio de correo físico- esa infracción en la que incurrió, y conforme a ello, la accionada procedió en atención al artículo 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, a publicar la citación para notificación personal, en la cartelera de la Secretaría de Movilidad y en la página Web y se fijó de igual manera la notificación por aviso, de lo cual dejó constancia, conforme lo ordena la citada norma.

Es preciso destacar que, acorde con lo estipulado en la Ley 1005 de 2006 en su artículo 1010 e igualmente en la Resolución 3027 de 2010 en el artículo 611, es obligación de todo ciudadano que maneja vehículos automotores –automóvil motocicleta- tener actualizada su información en el RUNT, de igual manera en la Ley 1843 de 2017, en su artículo 8, se indica que no actualizar los datos implica que la notificación se envié a la última registrada para el momento de los hechos, como en este caso ocurrió.

En ese sentido, el Juzgado le insiste a la parte accionante que su inconformidad frente al trámite de la notificación de los comparendos, deberá ser debatida ante la jurisdicción Contenciosa haciendo uso de las acciones administrativas como medios ordinarios de defensa judicial idóneos para la protección de sus garantías fundamentales.

Respecto a los comparendos N° D05001000000025845302 del 22 de diciembre 2019, D05001000000025845301 del 22 de diciembre 2019, D05001000000025820560 del 01 de diciembre 2019, D05001000000025811938 del 25 de noviembre 2019, D05001000000025798980 del 11 de noviembre 2019, D05001000000024186722 del 14 de octubre 2019 y D05001000000024186721 del 14 de octubre 2019, el Despacho no hará pronunciamiento alguno, toda vez que se encuentran en estado “EXONERADO”, y fueron descargados del sistema de contravenciones y del SIMIT, conforme lo certificó la accionada.

De ahí que no se advierte una actuación negligente ni abusiva por parte de la Secretaria de Movilidad de Medellín, ya que la misma procedió en la forma dispuesta por la normatividad aplicable.

Y es pertinente acotar que si bien es cierto en sentencia C-038 de 2020 la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, lo fue únicamente respecto del parágrafo 1°, eliminando la solidaridad que allí se establecía entre propietario y conductor, concluyó que al estar dentro del trámite sancionatorio, tal solidaridad debía examinarse bajo tres lineamientos constitucionales: (i) Respeto del derecho de Defensa, (ii) Principio de imputabilidad o responsabilidad personal y, (iii) Responsabilidad por Culpa, significando ello que el procedimiento ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de ayudas tecnológicas continúa vigente y de ahí el análisis efectuado en el párrafo precedente.

En tal sentencia la Corte claramente determinó que tal decisión no implicaba la inconstitucionalidad del sistema de detección automática de infracciones de tránsito, lo que le permite a esta funcionaria concluir, luego de un análisis sistémico de la norma y el pronunciamiento Constitucional, que tal situación no desdibuja el carácter subsidiario de la acción constitucional, pues únicamente ameritaría la intervención del Juez de Tutela cuando se avizore un perjuicio irremediable, lo que no aconteció en este caso.

De otro lado, con respecto al derecho de petición reclamado, se tiene que revisada tanto la solicitud de la accionante y la respuesta emitida por la entidad accionada, sobre los puntos cuestionados en el escrito de petición, la Secretaría de Movilidad emitió respuestas de fondo, pues fueron acordes con todos y cada uno de los cuestionamientos planteados por la señora Rosa Irene Varelas Ríos, permitiendo con ello concluir que la entidad accionada cumplió con la exigencia legal y constitucional de emitir respuesta de fondo a lo solicitado, poniéndola además en su conocimiento; sin violentar en ningún momento el derecho fundamental de petición de la actora, conllevando a la negación de ese amparo constitucional.

Con todo lo anterior, se confirma entonces que la presente acción de tutela deviene en improcedente, dada la existencia de otros medios de defensa judicial aptos para lograr la finalidad perseguida¹⁰, aunado a que no se presenta un perjuicio irremediable que justifique su prosperidad, ni vulneración alguna al derecho fundamental de petición del accionante.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la suscrita **Juez Trece Civil Municipal de Oralidad de Medellín**, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

Primero. Negar el amparo constitucional solicitado por **Rosa Irene Varelas Ríos** para la protección del derecho fundamental al debido proceso y petición, presuntamente vulnerados por el **Municipio de Medellín-Secretaría de Movilidad**, por cuanto existen otros mecanismos administrativos y judiciales y no se pudo determinar que se está ante la presencia de un perjuicio irremediable, ni un vulneración alguna al derecho fundamental de petición del accionante, que amerite la intervención excepcional del Juez de tutela.

¹⁰ Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-215 del 2 de marzo de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis. En esta decisión se adujo que el medio Judicial de lo Contencioso Administrativo “*es idóneo y eficaz para alcanzar los propósitos planteados por los peticionarios en cuanto al derecho al debido proceso se refiere, máxime cuando en la situación descrita por ellos no se vislumbra la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga viable la acción de tutela como mecanismo transitorio, toda vez que la multa impuesta no puede considerarse en sí misma un perjuicio irremediable, y teniendo en cuenta que al demandarse la nulidad de un acto administrativo se cuenta con la posibilidad de solicitar su suspensión provisional, medida cautelar que hace perder al acto su fuerza ejecutoria mientras se decide de fondo sobre su legalidad.*”

Segundo. Notificar a las partes la presente providencia e informarles que puede ser impugnada al correo electrónico cmpl13med@cendoj.ramajudicial.gov.co. En caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase inmediatamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE

A.

PAULA ANDREA SIERRA CARO

JUEZ

Firmado Por:

**PAULA ANDREA SIERRA CARO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

d895e6cfe1ec996b917a93531346846d61efe87dba528b1c0944d9cc557ef8ff

Documento generado en 05/02/2021 11:18:52 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**